

RESOLUCION N. 00628

“POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

LA DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

En uso de las facultades legales conferidas por la Ley 99 de 1993, con fundamento en la Ley 1333 de 2009, la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), en concordancia con el Acuerdo Distrital 257 del 30 de noviembre de 2006, el Decreto Distrital 109 del 16 de marzo de 2009, modificado por el Decreto Distrital 175 del 4 de mayo de 2009 y en especial, las delegadas en la Resolución 01865 del 6 de julio de 2021, modificada por la Resolución 046 del 13 de enero de 2022, de la Secretaría Distrital de Ambiente y,

CONSIDERANDO

I. ANTECEDENTES

Que, en atención al radicado 2008ER5757 del 11 de febrero de 2008, profesionales del Grupo de Quejas y Soluciones Ambientales de la Secretaría Distrital de Ambiente, adelantaron visita al establecimiento de comercio ubicado en la Carrera 100 A No. 134 A- 03 del Barrio Potrerillos de la Localidad de Suba, el día 14 de febrero de 2008, con el fin de verificar los procesos que allí se adelantan, la cual fue atendida por la señora María Clementina Moreno Salazar quien manifestó ser la propietaria del establecimiento.

Que, producto de dicha visita, se emitió el **Concepto Técnico No. 2485 del del 18 de febrero de 2008**, y posterior Requerimiento No. 2008EE14360 del 21 de mayo de 2008, mediante el cual se hacía necesario que la señora María Clementina Moreno Salazar identificada con cedula de ciudadanía No. 41.601.955 en calidad de propietaria del establecimiento de comercio ubicado en la Carrera 100 A No. 134 A- 03 del Barrio Potrerillos de la Localidad de Suba, efectuará lo siguiente:

“- En un término de treinta (30) días, confine completamente sus instalaciones y adecúe sus sistemas de ventilación de tal forma que la altura del punto de descarga y los dispositivos instalados aseguren la adecuada captación y disposición de los gases, vapores, olores y partículas sin generar molestias a los vecinos y transeúntes del sector.

- En un término de ocho (8) días, realice el registro del libro de operaciones para las empresas de transformación del sector forestal de conformidad con el Decreto 1791 de 1996.”

Con posterioridad, el 18 de febrero de 2010, profesionales de la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre de la Secretaría Distrital de Ambiente, adelantaron visita al establecimiento de comercio, ubicado en la Carrera 100 A No. 134 A- 03 del Barrio Potrerillos de

la Localidad de Suba, con el fin de verificar el cumplimiento del Requerimiento No. 2008EE14360 del 21 de mayo de 2008, la cual fue atendida por la señora María Clementina Moreno Salazar y de la cual se diligenció acta de vista de verificación No. 202.

Que, posteriormente y a través del **Concepto Técnico No. 04542 el 15 de marzo de 2010**, mediante se concluyó que la señora María Clementina Moreno Salazar en calidad de propietaria del establecimiento de comercio ubicado en la Carrera 100 A No. 134 A- 03 del Barrio Potrerillos:

“- Dio cumplimiento al requerimiento No. EE14360 del 21 de mayo de 2008 en el aparte: “confine completamente sus instalaciones y adecúe sus sistemas de ventilación de tal forma que la altura del punto de descarga y los dispositivos instalados aseguren la adecuada captación y disposición de los gases, vapores, olores y partículas sin generar molestias a los vecinos y transeúntes del sector”.

- No dio cumplimiento al requerimiento No. EE14360 del 21 de mayo de 2008 en el aparte: “realice el registro del libro de operaciones para las empresas de transformación del sector forestal de conformidad con el Decreto 1791 de 1996”.

Que, en atención a lo anterior mediante Auto No. 7535 del 26 de diciembre de 2011, el Director de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente, encontró merito suficiente para iniciar proceso sancionatorio ambiental en contra de la señora María Clementina Moreno Salazar identificada con cedula de ciudadanía No. 41.601.955 en calidad de propietaria del establecimiento de comercio ubicado en la Carrera 100 A No. 134 A- 03 del Barrio Potrerillos de la Localidad de Suba, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales.

Que, el anterior Auto se notificó personalmente a la señora María Clementina Moreno Salazar, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.601.955, en su calidad de propietaria del establecimiento de comercio ubicado en la Carrera 100 A No. 134 A- 03 del Barrio Potrerillos de la Localidad de Suba, el día 24 de enero de 2012.

Que, así mismo verificado el Boletín legal de la Secretaría Distrital de Ambiente, el Auto No. 7535 del 26 de diciembre de 2011, se encuentra debidamente publicado desde el 15 de febrero de 2015 y comunicado al Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios mediante oficio No. 2023EE32251 del 17 de febrero de 2023.

Que, mediante **Auto No. 02704 del 27 de diciembre de 2012**, el Director de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente, formulo pliego de cargos a título de dolo a la señora María Clementina Moreno Salazar identificada con cedula de ciudadanía No. 41.601.955 en calidad de propietaria del establecimiento de comercio ubicado en la Carrera 100 A No. 134 A- 03 del Barrio Potrerillos de la Localidad de Suba, por:

“CARGO PRIMERO: No dio cumplimiento al requerimiento No. 2008EE14360 del 21 de mayo de 200, por no haber tramitado ante la Secretaria Distrital de Ambiente-SDA, el registro del

libro de operaciones, trasgrediendo presuntamente con esta conducta el artículo 65 del Decreto 1791 de 1996”.

El anterior Auto se notificó personalmente a la señora María Clementina Moreno Salazar, identificada con Cedula de ciudadanía No. 41.601.955, en su calidad de Propietaria del establecimiento de comercio, el día 27 de marzo de 2013.

Que, el día 10 de abril de 2013, mediante radicado No 2013ER037567, la señora María Clementina Moreno Salazar presento descargos dentro del término establecido en el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, y en los que manifiesta que si dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 65 del Decreto 1791 de 1996 , toda vez que;

“Presento el libro de operaciones radicado en el Secretaria Distrital de Ambiente con el numero 037561 de fecha 10 de Abril de 2013, dando cumplimiento Al presente auto y haciendo mis respectivos descargos”.

Que, el día 09 de julio de 2013, profesionales de la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre de la Secretaría Distrital de Ambiente, adelantaron visita al establecimiento de comercio en mención, con el fin de verificar la actividad industrial que desarrollan, en constancia de lo anterior se diligencio acta de visita No. 436. En dicha visita se logró constatar que el establecimiento de comercio sigue en funcionamiento.

Posteriormente, la Dirección de control ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente, expidió el **Auto No. 00408 del 27 de febrero de 2015**, por el cual se decretó abrir a pruebas el proceso sancionatorio.

El anterior Auto se notificó por personalmente, a la señora María Clementina Moreno Salazar, identificada con Cedula de ciudadanía No. 41.601.955, en su calidad de Propietaria del establecimiento de comercio, el día 02 de julio de 2015.

Que una vez consultado en la página de Registro Único Empresarial (RUES), se encuentra que la sociedad comercial se encuentra **CANCELADA**, como último año Renovado fue en el 2015.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que previo a resolver el presente asunto, conviene hacer las siguientes precisiones de orden jurídico:

Teniendo en cuenta que la situación irregular que dio origen a las presentes diligencias fue conocida por esta entidad el día **11 de febrero de 2008**, es decir, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1333 de julio 21 de 2009, resulta procedente establecer como primera medida, que la normativa aplicable al presente caso es la prevista en el Decreto 01 de 1984 y la Ley 99 de 1993.

Consecuentemente, se advierte que los hechos materia de investigación son de naturaleza y de ejecución instantánea, dado que su consumación tuvo lugar en un único momento, claramente determinado en el tiempo, el cual marca el punto de referencia y de partida para el cómputo del término de caducidad.

A partir de lo expuesto, se hace necesario precisar cuál es el término de caducidad aplicable al presente caso, teniendo en cuenta que los hechos irregulares objeto del proceso ocurrieron antes de la entrada en vigor de la Ley 1333 de 2009. Para tal efecto acudiendo a la norma en comento, se procede al análisis del régimen de transición allí previsto, el cual establece:

“ARTÍCULO 64. TRANSICIÓN DE PROCEDIMIENTOS. *El procedimiento dispuesto en la presente ley es de ejecución inmediata. Los procesos sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al entrar en vigencia la presente ley, continuarán hasta su culminación con el procedimiento del Decreto 1594 de 1984.”*

En este sentido, en materia procesal y de cara a la transición de procedimientos previstos en el artículo 64 de la ley 1333 de 2009, se advierte que, para el presente caso se surtió la etapa de inicio con posterioridad a la entrada en vigor de la ley en mención, razón por la cual se concluye que en el sub júdice es aplicable el procedimiento establecido en dicha normatividad.

En efecto, las normas procesales son de aplicación inmediata, salvo que el Legislador establezca una excepción. Al respecto, el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, dispuso:

*“Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. **Sin embargo**, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, **los términos que hubieren comenzado a correr**, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, **se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones”.** (...) (Negrillas fuera de texto)*

Teniendo en cuenta lo anterior, debe tenerse presente que la naturaleza del hecho irregular que dio lugar al proceso sancionatorio ambiental, es el punto de referencia y de partida para el cómputo de la caducidad, lo cual significa que, por tratarse de un hecho de ejecución instantánea, la caducidad opera desde el mismo momento de su ocurrencia o desde la fecha en que la autoridad ambiental tuvo conocimiento del suceso, tal y como lo ha reafirmado en múltiples pronunciamientos la doctrina y la jurisprudencia.

Así las cosas, y en armonía con lo dispuesto en el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012 que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, se concluye que en el presente caso esta Secretaría conoció del hecho irregular el **11 de febrero de 2008**, fecha para la cual no se encontraba vigente la Ley 1333 de 2009, cuyo artículo 10 estableció un término de caducidad de 20 años, en su lugar,

regia el **artículo 38 del Decreto 01 de 1984**, que fijo el termino de caducidad de la facultad sancionatoria en **tres (3) años**.

En definitiva, al amparo del **DEBIDO PROCESO** y del **PRINCIPIO DE LEGALIDAD** a que se refiere el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012 que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, se concluye que si se trata de un hecho de ejecución instantánea o de ejecución continuada cuyo último acto se haya materializado ANTES del 21 de julio de 2009, el término de caducidad comenzó a correr al amparo del artículo 38 del Decreto 01 de 1984 (3 años), como en el sub lite, pues se trata de hechos irregulares acaecidos antes de que entrara en vigencia la caducidad del artículo 10 de la Ley 1333 de 2009, no siendo viable jurídicamente aplicar en forma retroactiva la caducidad de veinte (20 años) prevista en dicha norma.

Aunado a lo anterior, debe considerarse que a más de ser la caducidad en términos generales un fenómeno jurídico de carácter procesal, en materia administrativa genera la pérdida de competencia de la Administración para resolver sobre un determinado asunto, de suerte que dar aplicación retroactiva a la caducidad de 20 años prevista en la Ley 1333 de 2009 respecto de situaciones que se consumaron antes de su entrada en vigor, implicaría desconocer la máxima del debido proceso constitucional, a cuyo amparo *“nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente”*, y soslayar por completo el principio de legalidad que rige por excelencia las actuaciones administrativas.

Al respecto, es necesario indicar, que la caducidad de la acción reviste carácter de orden público, pues su establecimiento obedece a razones de interés general que imponen la obligación de obtener en tiempos breves la definición de ciertos derechos, lo que le otorga dinámica a la actividad administrativa, al paso que le imprime un importante grado de seguridad jurídica. Ahora bien, en materia sancionatoria, impide toda posibilidad de iniciar o proseguir una determinada actuación, dado que se trata de una institución procesal que ataca el derecho de acción, cuyo efecto inmediato es la imposibilidad de su ejercicio.

Así entonces, en relación con la disyuntiva que impone analizar si debe o no darse aplicación retroactiva, en el caso que nos ocupa, al término de caducidad de los 20 años previsto en la Ley 1333 de 2009, se deben analizar las disposiciones contenidas en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012; atendiendo las reglas generales de interpretación ante conflictos derivados de la aplicación de la ley procesal en el tiempo, las mismas que permiten concluir que en el presente caso el término de caducidad a aplicar es señalado en el artículo **38 del Decreto 01 de 1984**.

Frente al fenómeno de la caducidad, la H. Corte Constitucional, mediante Sentencia T-433, de la Sala Sexta de Revisión de fecha 24 de junio de 1992, ha dicho:

"Consiste la caducidad en el fenómeno procesal de declarar extinguida la acción por no incoarse ante la jurisdicción competente dentro del término perentorio establecido por el ordenamiento jurídico para ello. Opera la caducidad ipso jure, vale decir que el juez puede y debe declararla oficiosamente cuando verifique el hecho objetivo de la inactividad del actor en el lapso consagrado en la ley para iniciar la acción. Este plazo no se suspende ni interrumpe,

ya que se inspira en razones de orden público, lo cual sí ocurre entratándose de la prescripción civil, medio éste de extinguir las acciones de esta clase.

En este orden de ideas y entendida la caducidad como un término para realizar, un acto administrativo que ponga fin a la actuación sancionatoria, con el objetivo de no dejar en suspenso por mucho tiempo la ejecución del acto de que se trata; de conformidad con lo antes expuesto se procederá al análisis del fenómeno de la caducidad, al amparo del artículo 38 del Decreto 01 de 1984, el cual establece:

“Caducidad respecto de las sanciones. ARTÍCULO 38. Salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caducas a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas (...)”

Igualmente, el Consejo de Estado, reiteró su posición, mediante providencia del 23 de junio de 2000, expediente 9884, Magistrado ponente Dr. Julio E. Correa Restrepo, en el cual precisó:

“(...) Pues bien, el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, norma aplicable al presente caso, es claro en disponer que, salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caducas a los tres (3) años de producido el acto que puede ocasionarlas, por lo tanto, el término se debe contar a partir del momento en que se produce el hecho infractor. (...)”

Frente al término establecido en el referido artículo, se han expuesto tres tesis en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, razón por la cual, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., impartió directrices a las entidades y organismos Distritales, a través de la Directiva No. 007 de noviembre 09 de 2007, en la que señaló lo siguiente:

*“(...) Como se observa, han sido diversas las tesis expuestas en relación con el tema objeto de este documento, sin que hasta la fecha se haya generado una única línea jurisprudencial, razón por la cual se hace necesario impartir las siguientes instrucciones en cuanto al término de caducidad de la facultad sancionatoria de la administración: “ (...) *Teniendo en cuenta que no existe una posición unificada de la Jurisdicción Contencioso Administrativa frente a la interrupción del término de caducidad de la facultad sancionatoria de la administración, y que la administración debe acatar el criterio que desde el punto de vista del análisis judicial genere el menor riesgo al momento de contabilizar dicho término, se recomienda a las entidades Distritales que adelanten actuaciones administrativas tendientes a imponer una sanción, que acojan en dichos procesos la tesis restrictiva expuesta por el Consejo de Estado, es decir, aquella que indica que dentro del término de tres años señalado en la norma en comento, la administración debe expedir el acto principal, notificarlo y agotar la vía gubernativa(...)” (Subrayado fuera de texto).*

Para el caso que nos ocupa, se deduce que la autoridad ambiental competente para la fecha disponía de un término de tres (3) años, contados a partir de la fecha en que tuvo conocimiento de los hechos que dieron lugar a la presente actuación, esto es, desde el **14 de febrero de 2008**, fecha de la verificación de los hechos, que dieron lugar a la presente actuación, y que se relacionan con el presunto incumplimiento de la normatividad ambiental. Por tanto, la autoridad ambiental disponía hasta el día **13 de febrero de 2011**, para la expedición del acto administrativo que resolvería de fondo la actuación administrativa frente al proceso sancionatorio, trámite que no se surtió, por lo anterior, de tal modo que operó el fenómeno de la caducidad.

Es por lo anterior que se procederá a declarar la caducidad de la facultad sancionatoria de la administración, y en consecuencia, se ordenará el archivo de las diligencias administrativas contenidas en el expediente **SDA-08-2010-1127**.

III. COMPETENCIA DE ESTA SECRETARÍA

En relación con la competencia de esta Entidad, es preciso señalar que mediante el Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, modificado parcialmente por el Acuerdo Distrital 546 de 2013, se modificó la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades del Distrito, dentro de las cuales se transformó el Departamento Técnico Administrativo de Medio Ambiente DAMA, en la Secretaría Distrital de Ambiente, a la cual se le asignó, entre otras funciones, la de elaborar, revisar y expedir los actos administrativos por medio de los cuales se otorgan o niegan las licencias ambientales y demás instrumentos de manejo y control ambiental de competencia de este ente administrativo, así como los actos administrativos que sean necesarios para adelantar el procedimiento que tenga como fin el licenciamiento ambiental y demás autorizaciones ambientales.

En virtud del Decreto Distrital 109 del 16 de marzo de 2009, modificado parcialmente por el Decreto 175 del 04 de mayo de 2009, se estableció la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Ambiente, asignando las funciones de sus dependencias dentro de las cuales, está la de suscribir los actos administrativos por medio de los cuales la Secretaría otorga, concede, niega, modifica los permisos y/o autorizaciones ambientales.

Que en virtud del artículo 2 numeral 6° de la Resolución 1865 del 6 de julio de 2021 modificada por la Resolución 046 de 13 de enero de 2022, la Secretaría Distrital de Ambiente delegó en cabeza del Director de Control Ambiental de la Entidad, *“Expedir los actos administrativos que declaran la caducidad administrativa en los procesos sancionatorios.”*

Que, en mérito de lo expuesto, el Director de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá D.C.,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA CADUCIDAD de la facultad sancionatoria dentro del proceso sancionatorio de carácter ambiental en contra de la señora **MARÍA CLEMENTINA MORENO SALAZAR** identificada con cedula de ciudadanía No. 41.601.955, en calidad de propietaria del establecimiento de comercio, en la Carrera 100ª No. 134 A – 03 del Barrio Potrerillos de la Localidad de Suba en esta Ciudad; de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto y que constan en las diligencias contenidas en el expediente **SDA-08-2010-1127**.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR esta Resolución a la señora **MARÍA CLEMENTINA MORENO SALAZAR** identificada con cedula de ciudadanía No. 41.601.955, en calidad de

propietaria del establecimiento de comercio, en la Carrera 100ª No. 134 A – 03 del Barrio Potrerillos de la Localidad de Suba en esta Ciudad, de conformidad con los artículos 44 y siguientes del Código Contencioso Administrativo – Decreto 01 de 1984, en concordancia con el artículo 308 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución a la Oficina de Control Disciplinario Interno, para lo de su competencia.

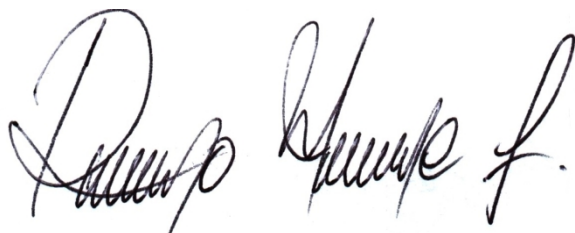
ARTÍCULO CUARTO: Publicar la presente Resolución en el boletín que para el efecto disponga la entidad. Lo anterior en cumplimiento del artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar la presente Resolución a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO SEXTO: Cumplido lo anterior, archivar definitivamente las diligencias contenidas en el expediente **SDA-08-2010-1127**, como consecuencia de lo previsto en el artículo primero de la presente providencia.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente resolución procede recurso de reposición el cual se deberá interponer ante la Dirección de Control Ambiental de esta Secretaría, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del presente acto administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 50 y 51 del Decreto 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo), en concordancia con el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
fecha



RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
DIRECTOR DE CONTROL AMBIENTAL

Elaboró:

ADRIANA PAOLA ZAMBRANO GONZALEZ	CPS:	CONTRATO 20230082 DE 2023	FECHA EJECUCION:	27/02/2023
ADRIANA PAOLA ZAMBRANO GONZALEZ	CPS:	CONTRATO 20230082 DE 2023	FECHA EJECUCION:	01/03/2023

Revisó:

LAURA CATALINA MORALES AREVALO

CPS:

CONTRATO 20230086
DE 2023

FECHA EJECUCION:

02/03/2023

Aprobó:

Firmó:

RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO

CPS:

FUNCIONARIO

FECHA EJECUCION:

21/04/2023